

## Los retos económicos tras el 26J

Rafael Doménech

### Diario Cinco Días (España)

Las elecciones de ayer nos vuelven a poner delante de los mismos retos que hace seis meses. El más urgente es reducir la tasa de paro estructural y crear empleo productivo y estable. El crecimiento de la productividad y de la ocupación son la mejor estrategia para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas y del Estado de bienestar, reducir la desigualdad y mejorar el nivel de vida. Aunque alcanzar estos objetivos no es inmediato, sí es factible con las políticas adecuadas. Pero no hay menús gratis ni atajos, y menos en una economía global sometida a una incesante transformación tecnológica.

Lamentablemente en la campaña electoral se han propuesto políticas que en lugar de resolver nuestros problemas los agravarían. No podemos hacer lo contrario a lo que funciona en otros países europeos (y también en muchos ámbitos de la economía española) y pretender conseguir mejores resultados que ellos. Con un desempleo tan elevado, nuestro historial nos obliga a ser más pragmáticos y humildes.

El desempleo es el resultado del desajuste de las regulaciones de los mercados de trabajo, bienes y servicios con el sistema productivo. España tiene una capacidad productiva que es mejor que la de un 80% de países en el mundo (la mayoría con un desempleo menor), pero sus rigideces y restricciones son mayores en términos relativos. Unas barreras excesivamente altas, sobre todo para las empresas menos productivas y los trabajadores menos cualificados, condenando a los segmentos más débiles al paro, la temporalidad o la economía sumergida. Aumentar los salarios sin que antes lo haga la productividad, no crea empleo, lo destruye. Elevar las barreras y rigideces sin que mejore la capacidad estructural solo traería más paro, precariedad y desigualdad. Primero hay que reducirlas hasta que el desempleo disminuya a niveles aceptables y que las empresas y trabajadores con mayores dificultades las superen con facilidad, con políticas activas bien diseñadas, efectivas y mejor dotadas, y ayudas y complementos salariales más eficaces.

Crear más y mejor empleo requiere que el contrato indefinido sea más atractivo que el temporal y reducir la fiscalidad del trabajo. Hay que mejorar la negociación colectiva y potenciar la flexibilidad interna y la respuesta de los salarios a la productividad, alineando objetivos de empresas y trabajadores. Al mismo tiempo, es preciso mejorar, racionalizar y simplificar las regulaciones para aumentar la competencia en los mercados de bienes y servicios, el empleo, la productividad y los salarios, y generar un clima de negocios que incremente el tamaño de las empresas, la internacionalización y la inversión nacional y extranjera en capital productivo, tecnológico y humano.

El orden de las políticas también importa en la consolidación y tamaño del sector público. Las políticas fiscales expansivas no se financian solas. El estímulo a corto plazo no reduce el déficit, lo aumenta y provoca un menor crecimiento futuro. No es posible resolver con políticas fiscales expansivas los problemas estructurales. Es un error pensar que el problema del paro estructural se resuelve con estímulos de demanda. La mejor estrategia es reducir el déficit con una política fiscal neutral, mientras el crecimiento de la actividad y del empleo aumentan los ingresos públicos. A pesar del ajuste fiscal, el gasto público en sanidad, educación o total per cápita a precios constantes en 2015 era superior al de 2007. Hay margen para gastar mejor y reordenar prioridades. Si a largo plazo se quiere llegar a niveles de presión fiscal como los de otras economías europeas, primero hay que aumentar la eficiencia del sector público hasta alcanzar la de esos países. Incrementar los impuestos sin mejorar la eficiencia solo reducirá el crecimiento y agravará el fraude y la desafección de los ciudadanos con el sector público. La economía española necesita una mejora de su calidad institucional, con una justicia más rápida y eficiente, que genere seguridad y certidumbre, que refuerce la transparencia y ejemplaridad de los cargos públicos, con una tolerancia cero

con la corrupción.

La nueva legislatura debe abordar sin falta el reto más importante a largo plazo para la sociedad española: mejorar su capital humano. La brecha con las economías europeas más avanzadas alcanza el 20% en años de escolarización de la población adulta. Además hay que mejorar la calidad del sistema educativo. La principal prioridad nacional debe ser reducir el fracaso escolar y el abandono temprano (con una tasa del 20%, la más elevada de toda la UE en 2015), mejorar la formación profesional, y fomentar la investigación de calidad y la innovación pública y privada. Todo ello contribuirá a asegurar una verdadera igualdad de oportunidades y a evitar que una parte de la población quede excluida de la transformación tecnológica en curso.